

2.18. JURISPRUDENCIA AMBIENTAL EN NAVARRA (pp. 2-9)

—

2.18. JURISPRUDÈNCIA AMBIENTAL A NAVARRA (pp. 10-16)

JOSÉ FRANCISCO ALENZA GARCÍA

Profesor titular de Derecho Administrativo / Professor titular de Dret Administratiu

Universidad Pública de Navarra

Sumario: 1. Introducción. 2. Delitos ecológicos. 3. Cuestiones diversas en torno a la autorización ambiental integrada en Navarra. 3.1. El objeto de la autorización ambiental integrada: el concepto de “instalación”. 3.2. Cuestiones sobre el procedimiento de otorgamiento de la autorización ambiental integrada. 3.3. Cuestiones sobre el contenido de la autorización ambiental integrada. 4. Responsabilidad por daños causados por fauna silvestre. 5. Relación de sentencias comentadas. 5.1. Sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (Sala de lo contencioso-administrativo). 5.2. Sentencias de los Juzgados de lo contencioso-administrativo. 5.3. Sentencias de Juzgados de lo Penal.

1. Introducción

La jurisprudencia ambiental recaída en Navarra en el primer semestre de 2010 no es muy abundante. Lo más sobresaliente es la existencia de dos condenas por delito ecológico que no son muy frecuentes en Navarra. La dos tuvieron como consecuencia la muerte o captura de especies protegidas.

También son reseñables otras dos sentencias sobre autorizaciones ambientales integradas. En una de ellas se aborda una gran número de consideraciones, tanto de procedimiento, como de fondo, sobre la autorización de impacto ambiental de una fábrica de cementos, sentando una doctrina que deberá tenerse muy cuenta de cara al futuro, al pronunciarse sobre aspectos de la Ley Foral de Intervención para la Protección Ambiental que no habían sido objeto, hasta el momento, de resoluciones jurisprudenciales.

Finalmente, aludo a varias sentencias de los juzgados de lo contencioso sobre reclamaciones de responsabilidad por daños producidos a vehículos como consecuencia de accidentes provocados por fauna silvestre cinegética.

2. Delitos ecológicos

Comenzando por lo más grave para el medio ambiente, lo haré por las dos sentencias condenatorias por sendos delitos ecológicos que tuvieron como consecuencia la muerte de especies catalogadas.

En el primer caso, (Sentencia del Juzgado de lo Penal núm. 1 de Pamplona, de 15 de enero de 2010) se condenó por un delito contra la fauna por cazar pájaros pertenecientes a especies catalogadas por su interés especial mediante cepos. Concurren los dos elementos exigidos por el artículo 325 CP en su redacción original: especies que no se pueden cazar o pescar (en este caso, por estar incluidas en el Catálogo Nacional de

Especies Amenazadas, por razón de su interés especial) y utilización de métodos (los cepos) expresamente prohibidos por la legislación foral.

Tiene cierto interés la apreciación del dolo del acusado, para lo que tiene relevancia el método utilizado para caza. En efecto, el dolo exigido por el tipo penal, para el juzgador, concurre con claridad “siquiera sea en la vertiente de dolo eventual, pues aunque el acusado pusiera los cepos para cazar otro tipo de aves no protegidas, lo cierto es que la colocación de estos evidencia que el acusado tuvo necesariamente que representarse la posibilidad de que cayeran en ellos otras aves protegidas (de las que, conforme indicaron los testigos, abundan en la zona, sobre todo alguna de ellas) y, sin embargo, no por ello dejó de colocar los cepos, aceptando, en consecuencia, el resultado típico para el caso de que éste se produjera”.

En el segundo caso (Sentencia del Juzgado de Instrucción de Aoiz, de 10 de febrero de 2010) se condenó la comisión de un delito contra los recursos naturales por imprudencia grave consistente en el vertido a través de un desagüe de un producto altamente tóxico, utilizado para la desinsectación de un granja, que causó la muerte de entre 10.000 y 72.000 ejemplares de cangrejos señal.

3. Cuestiones diversas en torno a la autorización ambiental integrada en Navarra

Dos sentencias se han dictado en las que se cuestionaba la legalidad de la concesión de dos autorizaciones ambientales integradas.

En la primera de ellas (STSJ de Navarra de 4 de enero de 2010, ponente Juan Antonio Hurtado Martínez) se impugnaba la autorización por no haberse ponderado debidamente el incremento del consumo de agua y los vertidos de la actividad autorizada. La sentencia pone de manifiesto el carácter técnico y marco de discrecionalidad en que se mueve la actividad impugnada, sin que se haya acreditado error o apreciación equivocada de la Administración. Figura, además, en el expediente el informe de la Confederación Hidrográfica competente por lo que se desestima el recurso presentado.

La STSJ de Navarra de 12 de marzo de 2010 (ponente Antonio Rubio Pérez) se ocupa de la impugnación de las autorizaciones otorgadas por el Gobierno de Navarra (autorización ambiental integrada y autorización de apertura) a una importante fábrica de cementos. Los recurrentes son un Ayuntamiento y tres vecinos de la misma localidad.

Se trata de una extensa sentencia que analiza distintas cuestiones de forma y de fondo de las autorizaciones impugnadas. Su doctrina es importante porque aborda cuestiones reguladas en la Ley Foral 4/2005, de 22 de marzo, de intervención para la protección ambiental (LFIPA) que hasta ahora no habían sido objeto de ningún pronunciamiento judicial.

Esas distintas cuestiones se analizan en la sentencia según el orden seguido en la demanda. Sin embargo, para mayor claridad expositiva creo que pueden agruparse en cuatro tipos de problemas: el relativa al objeto de la autorización, las cuestiones sobre procedimiento, las relativas al fondo y al contenido de la autorización ambiental integrada.

3.1. El objeto de la autorización ambiental integrada: el concepto de “instalación”

El recurrente considera que en virtud de la definición de instalación contenida en el artículo 3, c) de la LPCIC, “la autorización ambiental integrada debió extenderse no solo a la fabricación de cemento, sino también a la actividad extractiva para la obtención de materia prima para aquélla” por desarrollarse en un lugar próximo, así como por su vinculación e interdependencia y su efecto sinérgico con la misma.

Para la sentencia, en cambio, no se cumple ninguno de los requisitos establecidos en la definición de instalación. No se cumple el requisito de que ambas actividades (extractiva y fabril) se realicen en el mismo lugar, pues ni constituyen “una unidad física, ni puede decirse, si no es en términos relativos, que se encuentre próxima a ella pues es notorio que en el paraje geográfico en que todo ello se enclava, configurado como un valle por dos montes (o montañas) paralelos, se sitúan a no y otro lado y están separados por una autovía, el trazado del ferrocarril y el propio núcleo urbano, de forma que hasta su conexión a efectos de remitir el material de una a otra se realiza aéreamente”.

Tampoco se cumple el requisito de la relación de índole técnica entre ellas “que la parte actora parece dar por supuesta, pero no explica. Carentes de tal explicación, la relación que existe entre ellas no parece ser otra que la que se deriva del hecho de que la una (extractiva) suministra a la otra (fabril) el material a transformar por ésta. Que esto suceda con proximidad geográfica (relativa) supondrá, probablemente, un ahorro

económico en el transporte, pero no, de ningún modo, que exista relación de índole técnica” (F. J. 6º).

3.2. Cuestiones sobre el procedimiento de otorgamiento de la autorización ambiental integrada

Varios aspectos del procedimiento son objeto de consideración:

— El preceptivo trámite de la información pública con la documentación completa. La sentencia no consideró que se hubieran omitido de la información pública ningún documento esencial.

— La existencia de informes contradictorios del Ayuntamiento sobre la compatibilidad urbanística de la actividad. La sentencia considera que hizo bien la Administración de la Comunidad Foral en no aceptar las determinaciones del segundo informe, por ser el primero plenamente eficaz y porque del contenido del segundo no se deducen las razones urbanísticas que determinaban su carácter negativo.

— El trámite de audiencia ha de realizarse con los interesados, sin que ostenten dicha condición los que han formulado alegaciones en el trámite de información pública.

— El incumplimiento del plazo máximo de resolución no trae como consecuencia la caducidad, como afirmaban los recurrentes, sino el silencio administrativo negativo.

3.3. Cuestiones sobre el contenido de la autorización ambiental integrada

Sobre el fondo o contenido de la autorización cabe destacar tres aspectos:

— La distancia al núcleo de población de 2000 metros exigida por la Ordenanza municipal no prohíbe la instalación, en primer lugar, porque la instalación existe con anterioridad a la Ordenanza, de manera que los nuevos planeamientos solo podrían declarar a las instalaciones preexistentes fuera de ordenación. En segundo lugar, se afirma que “la distancia fijada en el RAMINP no es exigible en Navarra”. Recuerda la sentencia las disposiciones legales y las resoluciones jurisprudenciales que justifican dicha afirmación y concluye que “en nada cambia la cuestión por el hecho de que no haya una derogación o anulación expresa de la Ordenanza toda vez que esta trae causa, inequívocamente del meritado Reglamento por lo que, excluida por ley formal su

aplicación, deben entenderse tácitamente derogadas las normas anteriores de inferior rango que sean transcripción del mismo” (F. J. 5º).

— La integración de la evaluación de impacto ambiental es exigible a todas las nuevas instalaciones, pero no para las instalaciones existentes a la entrada en vigor de la LPCIC.

— La admisión temporal de niveles de emisiones superiores a las permitidas. La normativa foral de aplicación admite la excepción ocasional de los límites máximos de emisión y la autorización hace uso de esa posibilidad al establecer un periodo transitorio tendente a obtener esos límites máximos de emisión.

4. Responsabilidad por daños causados por fauna silvestre

Cinco sentencias se han dictado por los Juzgados de lo contencioso-administrativo sobre reclamaciones de responsabilidad por los daños causados a vehículos como consecuencia de la presencia en la carretera de fauna silvestre cinegética. Tres de ellas no tienen demasiado interés al centrarse únicamente en la cuantificación de los daños. Las otras dos, en cambio, sí se ocupan de cuestiones de fondo de mayor interés:

— Responsabilidad del titular del aprovechamiento cinegético (Sentencia del Juzgado contencioso-administrativo nº 1 de Pamplona, de 13 de enero de 2010).

La responsabilidad de daños causados a un vehículo por colisionar contra un jabalí se imputan por la Administración cinegética a una Asociación de Cazadores, gestora del aprovechamiento cinegético de un coto. Rechaza ésta su responsabilidad al haberse producido el accidente en horario nocturno, cuando está prohibida la caza y no haberse probado su conducta negligente. La sentencia, sin embargo, considera ajustada a derecho la resolución recurrida. Señala que ese mismo día se había producido en el coto una batida de jabalí en la que existieron 12 posturas, 3 resaqueadores y 10 perros. El accidente tuvo lugar dos horas y media después de haber finalizado la batida. Pero no es descabellado –dice la sentencia– entender “que los jabalíes, acosados por más de una docena de cazadores y diez perros estuvieran alterados, no sólo durante la batida, sino después de la misma, e intenten huir en cualquier dirección, teniendo que cruzar la carretera si es necesario”. Por tanto, la presencia de una manada de jabalíes en la calzada no puede considerarse como un hecho aislado, sino que es una consecuencia de

la acción de caza, siendo responsable, en consecuencia, el titular del aprovechamiento cinegético.

— Concurrencia de culpas y legislación aplicable (Sentencia del Juzgado contencioso-administrativo nº 3 de Pamplona, de 3 de febrero de 2010).

En este caso, los daños al vehículo se produjeron como consecuencia del accidente motivado por la maniobra realizada para evitar el impacto con un tejón muerto con el que el conductor se encontró en la carretera. La recurrente reclama indemnización de los daños en virtud del régimen general de responsabilidad patrimonial de la Administración, sin citar la normativa de caza, para lo cual debía haber probado que el tejón era una especie cinegética. En cuanto a la causalidad, considera la sentencia que es a la Administración a la que corresponde definir el standard de rendimiento ofrecido por el servicio público para evitar la situaciones de riesgo y de lesión patrimonial a los usuarios, acreditando que con los medios de que disponía resultaba imposible evitar los hechos. En este caso, la presencia de un animal muerto en la carretera “no es un fenómeno de imposible previsión, frente al que nada puede hacerse, sino es algo que con la debida diligencia pudo ser conocido y prevenido por la Administración, que no adoptó las medidas precisas para su evitación”. Por otro lado, se considera, de acuerdo con el informe pericial, que la causa inmediata del accidente y que agrava el resultado del mismo, es la realización por el conductor de una “maniobra evasiva incorrecta”. Existe, en definitiva, una concurrencia de culpas que se gradúa al 50%, por lo que se rebaja la cantidad indemnizatoria a la mitad.

5. Relación de sentencias comentadas

5.1. Sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (Sala de lo contencioso-administrativo)

STSJ de Navarra de 4 de enero de 2010, ponente Juan Antonio Hurtado Martínez. Carácter técnico y marco discrecional de la autorización ambiental integrada, sin que se haya acreditado error o apreciación equivocada sobre la disponibilidad de los recursos hídricos y los vertidos de la actividad autorizada.

STSJ de Navarra de 12 de marzo de 2010, ponente Antonio Rubio Pérez.

5.2. Sentencias de los Juzgados de lo contencioso-administrativo

Sentencia del Juzgado contencioso-administrativo nº 1 de Pamplona, de 13 de enero de 2010: responsabilidad por daños causados por fauna cinegética del titular del aprovechamiento cinegético o del terreno acotado por negligencia en la gestión o consecuencia de la acción de cazar. Aunque los daños se produjeron por la noche y horas después de una batida, se considera que los daños son consecuencia de la acción de caza realizada.

Sentencia del Juzgado contencioso-administrativo nº 2 de Pamplona, de 2 de febrero de 2010: conceptos y cuantía indemnizable por daños a un vehículo por fauna silvestre cinegética.

Sentencia del Juzgado contencioso-administrativo nº 3 de Pamplona, de 3 de febrero de 2010: responsabilidad por daños causados por un tejón muerto. Normativa aplicable: legislación general sobre responsabilidad y legislación de caza. Causalidad del daño: existencia de concurrencia de culpas por maniobra evasiva incorrecta del conductor del vehículo.

Sentencia del Juzgado contencioso-administrativo nº 3 de Pamplona, de 4 de marzo de 2010: responsabilidad por daños causados por fauna cinegética. Cuantificación del daño cuando hay un desajuste entre el valor venal del vehículo y el precio de reparación:

Sentencia del Juzgado contencioso-administrativo nº 3 de Pamplona, de 8 de marzo de 2010: responsabilidad por daños causados por fauna cinegética. Escrito de reclamación que se presentó a nombre del titular del vehículo y también de la aseguradora, como se deduce del encabezamiento del escrito.

5.3. Sentencias de Juzgados de lo Penal

Sentencia del Juzgado de lo Penal núm. 1 de Pamplona, de 15 de enero de 2010: delito contra la fauna por cazar pájaros pertenecientes a especies catalogadas por su interés especial mediante cepos. La utilización de éstos revela la evidente concurrencia del dolo, siquiera en su vertiente de dolo eventual.

Sentencia del Juzgado de Instrucción de Aoiz, de 10 de febrero de 2010: condena por un delito contra los recursos naturales cometido por imprudencia grave consistente en el

vertido de un producto tóxico, que causó la muerte de entre 10.000 y 72.000 ejemplares de cangrejos señal.

Sumari: 1. Introducció. 2. Delictes ecològics. 3. Qüestions diverses al voltant de l'autorització ambiental integrada a Navarra. 3.1. L'objecte de l'autorització ambiental integrada: el concepte d'"instal·lació". 2. Qüestions sobre el procediment d'atorgament de l'autorització ambiental integrada. 3.3. Qüestions sobre el contingut de l'autorització ambiental integrada. 4. Responsabilitat per danys causats per fauna silvestre. 5. Relació de sentències comentades. 5.1. Sentències del Tribunal Superior de Justícia de Navarra (Sala Contenciosa Administrativa). 5.2. Sentències dels jutjats contenciosos administratius. 5.3. Sentències de jutjats penals.

1. Introducció

La jurisprudència ambiental a Navarra en el primer semestre de 2010 no és gaire abundant. El més destacable són dues condemnes per delictes ecològics no gaire freqüents a Navarra. Les dues han tingut com a conseqüència la mort o la captura d'espècies protegides.

També mereixen ser esmentades dues sentències sobre autoritzacions ambientals integrades. En una s'hi aborda una gran nombre de consideracions, tant de procediment com de fons, sobre l'autorització d'impacte ambiental d'una fàbrica de ciment, i s'hi estableix una doctrina que ha de tenir-se molt compte de cara al futur, perquè es pronuncia sobre aspectes de la llei foral d'intervenció per a la protecció ambiental que, fins al moment, no havien estat objecte de resolucions jurisprudencials.

Finalment, al·ludeixo a diverses sentències dels jutjats contenciosos sobre reclamacions de responsabilitat per danys produïts a vehicles com a conseqüència d'accidents provocats per fauna silvestre cinegètica.

2. Delictes ecològics

Començant pel més greu respecte al medi ambient, faré referència a dues sentències condemnatòries per sengles delictes ecològics que han tingut com a conseqüència la mort d'espècies catalogades.

En el primer cas (Sentència del Jutjat Penal núm. 1 de Pamplona, de 15 de gener de 2010), s'ha condemnat per un delictes contra la fauna per caçar ocells pertanyents a espècies catalogades pel seu interès especial mitjançant ceps. Els dos elements que exigeix l'article 325 CP en la seva redacció original hi concorren: espècies que no es poden caçar o pescar (en aquest cas, perquè s'inclouen en el Catàleg nacional d'espècies amenaçades, per raó del seu interès especial) i utilització de mètodes expressament prohibits per la legislació foral (ceps).

Té cert interès l'apreciació del dol de l'acusat, per la qual cosa el mètode utilitzat per caçar és rellevant. En efecte, el dol que exigeix el tipus penal, pel jutjador, hi concorre amb claredat "tan sols sigui en la vessant de dol eventual, perquè tot i que l'acusat posés ceps per caçar una altra classe d'aus no protegides, el cert és que la col·locació d'aquests ceps evidencia que l'acusat necessàriament va haver de representar-se la possibilitat que hi caiguessin altres aus protegides (de les quals, segons van indicar els testimonis, alguna n'abunda a la zona) i, no obstant això, no va deixar de col·locar ceps, acceptant, en conseqüència, el resultat típic per al cas que es produís".

En el segon cas (Sentència del Jutjat d'Instrucció d'Aoiz, de 10 de febrer de 2010) es condemna la comissió d'un delictes contra els recursos naturals per imprudència greu, consistent en l'abocament, a través d'un desguàs, d'un producte altament tòxic utilitzat per desinsectar una granja, que va causar la mort d'entre 10.000 i 72.000 exemplars de crancs de senyal.

3. Qüestions diverses al voltant de l'autorització ambiental integrada a Navarra

S'han dictat dues sentències en què es qüestiona la legalitat de la concessió de dues autoritzacions ambientals integrades.

En la primera (STSJ de Navarra de 4 de gener de 2010, ponent: Juan Antonio Hurtado Martínez) s'impugna l'autorització per no haver ponderat degudament l'increment del consum d'aigua i els abocaments de l'activitat autoritzada. La sentència posa de manifest el caràcter tècnic i el marc de discrecionalitat en què es mou l'activitat impugnada, sense que s'hagi acreditat cap error o apreciació equivocada de l'Administració. A més a més, en l'expedient hi figura l'informe de la Confederació Hidrogràfica competent pel qual es desestima el recurs presentat.

La STSJ de Navarra de 12 de març de 2010 (ponent: Antonio Rubio Pérez) s'ocupa d'impugnar les autoritzacions atorgades pel Govern de Navarra (autorització ambiental integrada i autorització d'obertura) a una important fàbrica de ciment. Els recurrents són l'Ajuntament i tres veïns de la mateixa localitat.

Es tracta d'una sentència extensa que analitza diferents qüestions de forma i de fons de les autoritzacions impugnades. La seva doctrina és important perquè aborda qüestions que regula la Llei foral 4/2005, de 22 de març, d'intervenció per a la protecció ambiental (LFIPA) que fins ara no havien estat objecte de cap pronunciament judicial.

Aquestes diferents qüestions s'analitzen en la sentència segons l'ordre que se segueix en la demanda. No obstant això, per a més claredat expositiva, crec que poden agrupar-se en quatre tipus de problemes: la qüestió relativa a la fi de l'autorització, les qüestions sobre procediment, les relatives al fons i al contingut de l'autorització ambiental integrada.

3.1. L'objecte de l'autorització ambiental integrada: el concepte d'"instal·lació"

El recurrent considera que en virtut de la definició d'"instal·lació" de l'article 3, c) de la LPCIC, "l'autorització ambiental integrada es devia haver estès no sols a la fabricació de ciment, sinó també a l'activitat extractiva per obtenir primera matèria", ja que havia tingut lloc en un lloc pròxim, així com per la seva vinculació i interdependència i el seu efecte sinèrgic.

Segons la sentència, en canvi, no es compleix cap de les condicions que estableix la definició d'*instal·lació*. El requisit que ambdues activitats (extractiva i fabril) es realitzin en el mateix lloc no es compleix, perquè ni constitueixen "una unitat física, ni pot dir-se, si no és en termes relatius, que s'hi trobi pròxima, perquè és notori que al paratge geogràfic en què tot això s'enclava, configurat com una vall per dos monts paral·lels (o muntanyes), se situen a un i altre costat i estan separats per una autovia, pel traçat del ferrocarril i pel mateix nucli urbà, de manera que la connexió, als efectes de remetre el material d'una banda a l'altra, es realitza aèriament".

Tampoc no es compleix el requisit de la relació d'índole tècnica entre si "que la part actora dona per suposada, però no l'explica. Sense aquesta explicació, la relació que existeix entre si no sembla cap altra que la que es deriva del fet que l'una (extractiva) subministra el material que cal transformar a l'altra (fabril). Que això succeeixi amb proximitat geogràfica (relativa) ha de suposar, probablement, un estalvi econòmic en el transport, però no que hi hagi relació d'índole tècnica" (F. J. 6è).

2. Qüestions sobre el procediment d'atorgament de l'autorització ambiental integrada

Cal considerar diversos aspectes del procediment:

— El tràmit preceptiu de la informació pública amb la documentació completa. La sentència no considera que s'hagi omès de la informació pública cap document essencial.

— L'existència d'informes contradictoris de l'Ajuntament sobre la compatibilitat urbanística de l'activitat. La sentència considera que l'Administració de la Comunitat Foral ha fet bé a no acceptar les determinacions del segon informe, per haver estat el primer plenament eficaç i perquè del contingut del segon no se'n dedueixen les raons urbanístiques que en determinen el caràcter negatiu.

— El tràmit d'audiència ha de realitzar-se amb els interessats, sense que els qui han formulat al·legacions en el tràmit d'informació pública tinguin aquesta condició.

— L'incompliment del termini màxim de resolució no comporta caducitat, com afirmaevn els recurrents, sinó el silenci administratiu negatiu.

3.3. Qüestions sobre el contingut de l'autorització ambiental integrada

Del fons o contingut de l'autorització cal destacar-ne tres aspectes:

— La distància al nucli de població de 2000 metres que exigeix l'ordenança municipal no prohibeix la instal·lació, en primer lloc, perquè la instal·lació és anterior a l'ordenança, de manera que els nous planejaments només podrien declarar a les instal·lacions preexistents fora d'ordenació. En segon lloc, s'afirma que “la distància que fixa el RAMINP no és exigible a Navarra”. La sentència recorda les disposicions legals i les resolucions jurisprudencials que justifiquen aquesta afirmació i conclou que “la qüestió no canvia en res pel fet que no hi hagi derogació o anul·lació expressa de l'ordenança, atès que aquesta porta causa, inequívocament del meritat Reglament pel qual, exclosa la seva aplicació per llei formal, s'han de considerar tàcitament derogades les normes anteriors de rang inferior que en siguin transcripció” (F. J. 5è).

— La integració de l'avaluació d'impacte ambiental s'exigeix a totes les instal·lacions noves, però no a les instal·lacions existents a l'entrada en vigor de la LPCIC.

— L'admissió temporal de nivells d'emissions superiors a les permeses. La normativa foral d'aplicació admet l'excepció ocasional dels límits màxims d'emissió, i l'autorització fa ús d'aquesta possibilitat en establir un període transitori tendent a obtenir aquests límits màxims d'emissió.

4. Responsabilitat per danys causats per fauna silvestre

Els jutjats contenciosos administratius han dictat cinc sentències sobre reclamacions de responsabilitat per danys causats a vehicles com a conseqüència de la presència de fauna silvestre cinegètica a la carretera. Tres de les quals no tenen gaire interès a centrar-se únicament en la quantificació dels danys. Les altres dos, en canvi, s'ocupen de qüestions de fons de més interès:

— Responsabilitat del titular de l'aprofitament cinegètic (Sentència del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de Pamplona, de 13 de gener de 2010)

L'Administració cinegètica imputa la responsabilitat de danys causats a un vehicle per col·lidir contra un porc senglar a una associació de caçadors, gestora de l'aprofitament cinegètic d'un vedat. L'associació rebutja la responsabilitat perquè l'accident es va produir en horari nocturn, en què la caça està prohibida i la conducta negligent del conductor no s'ha demostrat. La sentència, no obstant això, considera ajustada a dret la resolució recorreguda. Assenyala que aquest mateix dia al vedat s'hi havia produït una batuda de porcs senglars, en la qual hi van haver 12 postures, 3 resaquejadors i 10 gossos. L'accident va tenir lloc dues hores i mitja després d'haver finalitzat la batuda. Però no és desgavellat —diu la sentència— considerar “que els porcs senglars, empaitats per més d'una dotzena de caçadors i deu gossos estiguessin alterats, no sols durant la batuda, sinó després, i que intentessin fugir en qualsevol direcció, havent de creuar la carretera si convenia”. Per tant, la presència d'una bandada de porcs senglars a la calçada no pot considerar-se un fet aïllat, sinó que és una conseqüència de l'acció de caça; per tant, n'és responsable el titular de l'aprofitament cinegètic.

— Concurrència de culpes i legislació aplicable (Sentència del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3 de Pamplona, de 3 de febrer de 2010)

En aquest cas, els danys al vehicle es van produir com a conseqüència de l'accident ocorregut per la maniobra per evitar l'impacte contra un teixó mort amb què el conductor es va trobar a la carretera. La recurrent reclama indemnització dels danys en virtut del règim general de responsabilitat patrimonial de l'Administració, sense citar la normativa de caça, per la qual cosa hagués hagut de demostrar que el teixó era una espècie cinegètica. Quant a la causalitat, la sentència considera que és l'Administració a qui correspon definir l'estàndard de rendiment ofert pel servei públic per evitar situacions de risc i de lesió patrimonial als usuaris, acreditant que amb els mitjans de

què disposava resultava impossible evitar els fets. En aquest cas, la presència d'un animal mort a la carretera “no és cap fenomen impossible de preveure, davant del qual no es pot fer res, si no és quelcom que amb la diligència corresponent l'Administració ho hagués pogut conèixer i preveure, la qual no va adoptar les mesures necessàries per evitar-ho”. D'altra banda, d'acord amb l'informe pericial, es considera que la causa immediata de l'accident i que n'agreuja el resultat, és la realització d'una “maniobra evasiva incorrecta” del conductor. En definitiva, hi ha una concurrència de culpes que es gradua al 50%, per la qual cosa la quantitat indemnitzatòria es rebaixa a la meitat.

5. Relació de sentències comentades

5.1. Sentències del Tribunal Superior de Justícia de Navarra (Sala Contenciosa Administrativa)

STSJ de Navarra de 4 de gener de 2010, ponent: Juan Antonio Hurtado Martínez. Caràcter tècnic i marc discrecional de l'autorització ambiental integrada, sense que s'hagi acreditat cap error o apreciació equivocada sobre la disponibilitat dels recursos hídrics i els abocaments de l'activitat autoritzada.

STSJ de Navarra de 12 de març de 2010, ponent: Antonio Rubio Pérez.

5.2. Sentències dels jutjats contenciosos administratius

Sentència del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de Pamplona, de 13 de gener de 2010: responsabilitat per danys causats per fauna cinegètica del titular de l'aprofitament cinegètic o del terreny tancat per negligència en la gestió o conseqüència de l'acció de caçar. Tot i que els danys es van produir a la nit, hores després d'una batuda, es considera que els danys són conseqüència de l'acció de caça realitzada.

Sentència del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2 de Pamplona, de 2 de febrer de 2010: conceptes i import indemnitzable per danys a un vehicle a causa de fauna silvestre cinegètica.

Sentència del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3 de Pamplona, de 3 de febrer de 2010: responsabilitat per danys causats per un teixó mort. Normativa aplicable: legislació general sobre responsabilitat i legislació de caça. Causalitat del dany: concurrència de culpes per maniobra evasiva incorrecta del conductor del vehicle.

Sentència del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3 de Pamplona, de 4 de març de 2010: responsabilitat per danys causats per fauna cinegètica. Quantificació del dany quan hi ha un desajust entre el valor venal del vehicle i el cost de reparació:

Sentència del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3 de Pamplona, de 8 de març de 2010: responsabilitat per danys causats per fauna cinegètica. Escrit de reclamació que es va presentar a nom del titular del vehicle i també de l'asseguradora, tal com es dedueix de l'encapçalament de l'escrit.

5.3. Sentències de jutjats penals

Sentència del Jutjat Penal núm. 1 de Pamplona, de 15 de gener de 2010: delictes contra la fauna per caçar ocells pertanyents a espècies catalogades pel seu interès especial mitjançant ceps. La utilització de ceps revela la concurrència evident del dol, tan sols en la vessant de dol eventual.

Sentència del Jutjat d'Instrucció d'Aoiz, de 10 de febrer de 2010: condemna per un delictes contra els recursos natural que s'ha comès per imprudència greu consistent en l'abocament d'un producte tòxic que va causar la mort d'entre 10.000 i 72.000 exemplars de crancs de senyal.